

# ASAMBLEA GENERAL

NOVENO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 398a.

SESION

Martes 5 de octubre de 1954,  
a las 15.45 horas

Nueva York

## SUMARIO

	Página
Tema 49 del programa ( <i>continuación</i> )	
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su sexto período de sesiones (excepto del capítulo III) ( <i>continuación</i> )	7

**Presidente:** Sr. Francisco V. GARCIA AMADOR  
(Cuba).

TEMA 49 DEL PROGRAMA (*continuación*)

**Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su sexto período de sesiones (excepto el capítulo III) (A/2693) (*continuación*)**

**Capítulo II: La nacionalidad, inclusive la apatridia (*continuación*)**

DEBATE GENERAL (*continuación*)

1. El Sr. NANDY (Pakistán) dice que la apatridia es, en el peor de los casos, un delito internacional; en el mejor, una situación poco satisfactoria; y que, en todo caso, debe suprimirse. Su delegación ve con beneplácito las medidas correctivas sugeridas por la Comisión de Derecho Internacional bajo la forma de los dos proyectos de convención relativas a la apatridia en el porvenir, y apoya especialmente los dos párrafos de sus respectivos preámbulos que dicen que la apatridia trae a menudo como resultado grandes sufrimientos y penalidades que conmueven la conciencia y ofenden la dignidad humana, y que es frecuentemente causa de fricción entre los Estados.

2. Todavía no parece posible la supresión total de la apatridia en el porvenir y por esto su delegación prefiere el tipo de acción previsto en el proyecto de convención para reducir los casos de apatridia en el porvenir. Tanto la Comisión como la Asamblea General podrían, por supuesto, modificar y mejorar dicho proyecto.

3. Se reserva hasta otra ocasión sus comentarios sobre el tema más general de la nacionalidad y sobre la condición jurídica especial que debiera concederse a los actuales apátridas.

4. El Sr. GARCIA OLANO (Argentina), refiriéndose a la primera parte del capítulo II, dice que en la Argentina los apátridas no constituyen un problema porque ni son tantos, ni se encuentran en situación tan desventajosa frente a los ciudadanos argentinos. Según el artículo 31 de la Constitución argentina, y en conformidad con leyes aprobadas recientemente, los apátridas disfrutan, como los demás extranjeros que ingresan legalmente al país, de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos. El procedimiento de naturalización es sencillo y los apátridas pueden adquirir la ciudadanía argentina en un breve plazo.

5. Por estas razones su delegación no tiene observaciones que hacer con respecto a los dos proyectos de convención, pero desea reservarse su posición con respecto al artículo 3 de ambos textos que se encuentra en conflicto con la legislación argentina. Con arreglo a ésta, la persona que haya nacido a bordo de un buque extranjero, pero dentro de aguas territoriales argentinas o a bordo de una aeronave que vuele sobre territorio argentino, tiene la ciudadanía argentina.

6. En lo que atañe a la segunda parte del capítulo II, indica que las sugerencias hechas para tratar el problema de los casos de apatridia en la actualidad son superfluas y sólo servirían para crear confusión en vista de la convención aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York en septiembre de 1954.

7. No cree necesario hacer comentarios a la tercera parte del capítulo II.

8. El Sr. ROBINSON (Israel) manifiesta que tratará de hacer una apreciación general de los proyectos de convención antes de exponer la posición de su Gobierno con respecto a la sugerencia, implícita en el artículo 12 de ambos textos, de que la convención debe ser aprobada por la Asamblea General.

9. Desea, en primer lugar, rendir homenaje a la Comisión de Derecho Internacional por la forma en que ha encarado y ejecutado su tarea. Los proyectos de convención contienen remedios para casi todas las causas de apatridia. Los nueve primeros artículos ofrecen soluciones para los casos en que las partes contratantes mantengan el *statu quo* territorial, mientras que el artículo 10 constituye un nuevo recurso por el que se trata de anticipar las situaciones que podrían plantearse debido a posibles cambios de fronteras en el porvenir. Además, el artículo 2 crea una presunción especial para el caso de los expósitos.

10. A pesar de la diferencia de título de los dos proyectos de convención, los textos en sí no son de naturaleza realmente diferente. Las expresiones "supresión" y "reducir" no pueden interpretarse en este caso con arreglo al significado habitual que les da el diccionario. La propia Comisión de Derecho Internacional ha señalado que el texto de la convención para la supresión de la apatridia no abarcaba la totalidad de los casos; en los párrafos 135 y 139 del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su quinto período de sesiones (A/2456) se mencionan algunos casos restantes para los cuales no se ha tomado disposición alguna. Por otra parte, la comparación de ambos proyectos demuestra que tienen en común seis de los 10 artículos esenciales. Las diferencias subsistentes son el resultado de ajustes exigidos por la realidad. Además, teniendo en cuenta el valor bastante problemático del artículo 10, la votación en la propia Comisión de Derecho Internacional y la cláusula de reservas del artículo 13, la con-

vención para la supresión de la apatridia está ya condenada de antemano al fracaso.

11. En rigor, las expresiones “supresión” y “reducir” se utilizan en una forma que induce ligeramente a error. La apatridia no existe *per se* y, por consiguiente, los esfuerzos tendientes a “suprimirla” o “reducirla” se refieren a sus *causas*.

12. Por estas razones, la delegación de Israel prefiere ciertamente la convención más realista tendiente a reducir la apatridia, aunque resulta difícil comprender por qué los dos últimos párrafos del preámbulo de ambos proyectos sostienen que la supresión es *imperativa*, mientras que la reducción es *conveniente*. Lo contrario habría parecido más lógico.

13. Al examinar la posibilidad de la aprobación inmediata de una o de ambas convenciones, el Sr. Robinson lamenta tener que informar que su delegación se opondrá, por ciertas razones, a su aprobación inmediata.

14. En primer lugar, la perfección jurídica de ambos instrumentos constituye en sí misma un inconveniente. En los órganos legislativos nacionales se presentan a menudo situaciones parecidas: el proyecto preparado por un ministerio competente y aprobado por el poder ejecutivo es casi siempre más perfecto que el texto definitivo aceptado por la asamblea parlamentaria, pero éste último tiene más probabilidades de éxito práctico. Un ejemplo de esa perfección excesiva lo encontramos en el artículo 10, común a los proyectos en cuestión. Carece de valor práctico con respecto a todo nuevo Estado que pueda constituirse en el porvenir y que, por consiguiente, no podría quedar limitado ni siquiera por una convención universal. Además, es muy dudoso que la disposición sea eficaz en el caso de los Estados partes en la convención que llegaran a adquirir el carácter de nuevos Estados debido a un importante aumento en su territorio. El representante de Israel señala, de paso, que en el párrafo 12 del informe de la Comisión de Derecho Internacional (A/2693) aparentemente no se ha tomado en cuenta la existencia del artículo 10, puesto que allí se afirma categóricamente que “la apatridia se debe precisamente a la presencia de . . . disposiciones en el derecho interno”.

15. En segundo lugar, la Comisión parece haber insistido demasiado en los “males” de la apatridia. Al condenarla en los términos enérgicos empleados en el tercer párrafo del preámbulo, no se tiene en cuenta que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados firmado en 1931, y la convención redactada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en septiembre de 1954, han mejorado considerablemente la suerte de distintas categorías de apátridas. De un modo similar, en el cuarto párrafo del preámbulo se exagera la influencia de la apatridia en las relaciones internacionales. La sugestión contenida en el párrafo 129 del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su quinto período de sesiones (A/2456), según la cual la “fricción” se produce por culpa de la incapacidad de los Estados para deportar a las personas desnacionalizadas a su país de origen, no se concilia fácilmente con el inciso 1) del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que prohíbe la deportación de una persona si, como consecuencia de la misma, existiese la probabilidad de que sufra persecuciones, disposición que la reciente conferencia sobre el estatuto de los apátridas había calificado de expresión de una regla general de derecho inter-

nacional. Es evidente que en un Estado civilizado la incapacidad para deportar a una persona determinada no tiene importancia vital; al contrario, se ha llegado a reconocer como principio humanitario, el no deportar personas que están en peligro de ser perseguidas.

16. En tercer lugar, la Comisión de Derecho Internacional parece haber pasado por alto la existencia de varios instrumentos internacionales destinados a suprimir o reducir los casos de apatridia. Efectivamente, la Convención sobre Conflictos de Leyes en materia de Nacionalidad, firmada en La Haya en 1930, y la Convención sobre Nacionalidad, firmada en Montevideo en 1933 y que en gran parte puede considerarse como una ampliación de la Convención de Río de Janeiro de 1906 (Convención que fija la condición de los ciudadanos naturalizados que renuevan su residencia en el país de su origen), presentan varias soluciones. Un exceso de tratados podría crear un conflicto de obligaciones y producir resultados opuestos a los que primitivamente se deseaba obtener.

17. En cuarto lugar, la Comisión de Derecho Internacional olvida que el proyecto de convención relativo a la nacionalidad de la mujer casada contiene disposiciones sobre la condición jurídica de la mujer casada. El propósito de esta última convención es garantizar la igualdad entre los sexos, sin tener en cuenta el peligro de crear posibles casos de apatridia. Por consiguiente, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión de Derecho Internacional abordan el mismo problema desde un ángulo muy distinto.

18. Por último, la delegación de Israel considera difícil aceptar el precio exigido para suprimir o reducir los casos de apatridia. Si bien en el preámbulo se cita la disposición de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que toda persona tiene *derecho* a una nacionalidad, el texto de los dos proyectos de convención parece inspirarse en el principio de que toda persona está *obligada* a tener una nacionalidad. La prueba más concluyente de esto aparece en el artículo 7, común a los dos proyectos, que establece, en realidad, un principio de imposición de la nacionalidad sin dejar a la persona interesada ninguna autonomía o derecho de elección. El problema de la supresión de la apatridia no puede ser desvinculado tan arbitrariamente de otros aspectos de los derechos humanos.

19. Por estas razones, la delegación de Israel, pese a la profunda simpatía que le inspiran las finalidades de los proyectos, y a que no tiene objeciones serias que oponer a los principios del proyecto de convención para reducir los casos de apatridia en el porvenir, no está en condiciones de otorgarles su aceptación sin reservas. No obstante, todavía se ofrecen a la Comisión otras varias posibilidades. En primer lugar, los textos podrían ser discutidos detalladamente y modificados, método que fué sugerido por el representante del Reino Unido en la sesión anterior. En segundo lugar, se podría convocar a una conferencia de plenipotenciarios con el propósito concreto de adoptar una convención. Por último, la Asamblea General podría tomar nota de los dos proyectos como fuentes valiosas del derecho internacional, con arreglo al inciso d) del párrafo 1) del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

20. Con respecto a estas posibilidades, el Sr. Robinson reserva el derecho de su delegación a exponer sus puntos de vista en una etapa posterior.

21. El Sr. AKANT (Turquía) señala que si bien el capítulo II del informe tiene como título "La nacionalidad, inclusiva la apatridia", la Comisión de Derecho Internacional se ha concretado a estudiar el problema de la apatridia y ha dejado de lado el problema de la nacionalidad en general. Pero es precisamente el problema importante y complejo de la nacionalidad, con respecto al cual se plantean tantos conflictos en el derecho interno de los países, el que reclama la codificación. Aunque varios órganos de las Naciones Unidas, inclusive el Consejo Económico y Social, han tratado diversos aspectos del problema, como el de la nacionalidad de la mujer casada, sería conveniente que la Comisión de Derecho Internacional tratara el tema en conjunto y lo antes posible.

22. Refiriéndose especialmente al problema de la apatridia y a los proyectos preparados por la Comisión de Derecho Internacional, si bien ambos textos se proponen restringir la apatridia mediante la aplicación del *jus soli* antes que del *jus sanguinis*, la delegación de Turquía considera que el proyecto de convención para reducir los casos de apatridia en el porvenir debiera recibir preferencia porque representa un enfoque más prudente y cauteloso del problema.

23. El Sr. TRIKUMDAS (India) declara que su delegación tendrá que abstenerse en cualquier medida que pueda ser adoptada respecto a los dos proyectos de convención que la Comisión tiene ante sí, no porque esté en desacuerdo con sus ideas fundamentales, sino porque la India se encuentra en una situación especial por haber adquirido recientemente la calidad de Estado y debido a ciertos cambios en su territorio. Si bien la Constitución define la ciudadanía, la India no tiene todavía una ley que rijan la naturalización, aunque se está estudiando la legislación pertinente.

24. Una convención destinada a suprimir, o por lo menos a reducir los casos de apatridia, sería muy conveniente, no sólo porque ayudaría a los muchos infortunados que en épocas recientes han perdido su nacionalidad por razones ajenas a su voluntad, sino porque constituiría un ideal que podría servir de norma a las legislaciones internas. Sin embargo, como lo ha señalado el representante de Israel, sería difícil para los países adoptar un sistema uniforme si se tienen en cuenta los diferentes problemas especiales a los que algunos de ellos deben enfrentarse. Los proyectos de convención se ocupan de algunos de esos problemas, tales como la extensión de los derechos de la ciudadanía adquirida por naturalización, sujeción de los ciudadanos naturalizados a la privación de nacionalidad y la privación de nacionalidad a los ciudadanos nacidos en el país. Si bien el artículo 8 del proyecto de convención para reducir los casos de apatridia trata algunos aspectos de este último problema, no menciona todas las causas posibles de privación de la nacionalidad.

25. Aunque en la India no se presente en gran escala el problema inmediato de la apatridia, como ocurre en Europa, es probable que tenga que examinar en breve la situación de las personas de origen indio, pero de nacionalidad extranjera, que desean regresar a la India. El Gobierno de la India redacta sus leyes de naturalización teniendo presente esta posibilidad.

26. El Sr. CHAUMONT (Francia) rinde homenaje a la Comisión de Derecho Internacional que ha dado pruebas, en los dos proyectos de convención referentes

a la apatridia en el porvenir, de habilidad jurídica y de visión política; de lo primero, al prever todos los casos posibles que pudiesen tener como resultado la apatridia; de lo segundo, al tomar en cuenta las dificultades políticas de los Estados presentándoles dos textos para que elijan entre ellos.

27. El problema de la apatridia es, por supuesto sumamente complejo; no obstante, el Gobierno de Francia está dispuesto a colaborar honesta y sinceramente en todos los esfuerzos encaminados a la supresión, o por lo menos a la reducción de la apatridia en el porvenir, y a estudiar los dos proyectos de convención con el objeto de examinar las posibilidades de llegar a un acuerdo con otros gobiernos sobre esta cuestión.

28. Por el momento, sin embargo, desea limitar sus observaciones a una cuestión de mero procedimiento, es decir a las medidas que se adoptarán en el actual período de sesiones con respecto a ambos textos. Aunque está dispuesto a escuchar las opiniones y sugerencias de otras delegaciones, cree personalmente que los textos no están listos para ser aprobados por la Asamblea General por no conocerse suficientemente la posición de los distintos gobiernos. La Comisión de Derecho Internacional, claro está, invitó a los gobiernos a presentar observaciones sobre los dos proyectos de convención, pero solamente la cuarta parte de los Estados Miembros respondieron a la invitación. Además la gran mayoría de los gobiernos que presentaron observaciones, con la notable excepción del Reino Unido, se limitaron a comparar las disposiciones de los dos proyectos de convención con su legislación interna actualmente en vigor y a indicar el deseo de aceptar los proyectos de convención siempre que fueran compatibles con dicha legislación. Dichos gobiernos omitieron examinar los proyectos de convención por sus propios méritos, y no indicaron si, en su opinión, dichos textos lograrían en realidad la finalidad perseguida de suprimir o reducir los casos de apatridia; si estaban dispuestos a lograr esa finalidad mediante la concertación de una convención internacional; si consideraban que las condiciones políticas generales favorecerían ese procedimiento y si estaban dispuestos a modificar su legislación interna para ajustarla al nuevo derecho internacional creado por ellos en esta forma. La Asamblea General, hasta conocer la respuesta a esas preguntas fundamentales, no podría proceder últimamente a la adopción de uno u otro de los proyectos de convención. Al preparar estos textos, la Comisión de Derecho Internacional ha cumplido con su tarea y la ha cumplido airoosamente. Corresponde a los gobiernos dar el próximo paso.

29. La Sexta Comisión, por supuesto, podría pasar a examinar los proyectos de convención artículo por artículo, si lo considera conveniente, ya que todos los gobiernos, hayan presentado o no observaciones, tienen una opinión formada sobre el problema e indudablemente están dispuestos a expresarla. En vista de las consideraciones expuestas sería más atinado, sin embargo, confiar esta tarea a una conferencia de plenipotenciarios, medida que satisface a la delegación de Francia, especialmente porque acaba de celebrarse una conferencia similar que se ocupó de los casos actuales de apatridia. Por otra parte si los gobiernos desean contar con más tiempo para reflexionar, se podrían transmitir los proyectos de convención al Consejo Económico y Social que convocaría luego a una conferencia de plenipotenciarios y presentaría a la Asamblea General un informe al respecto.

30. El representante de Francia invita a otras delegaciones a exponer su opinión sobre el problema de procedimiento que acaba de plantear y se reserva el derecho

a comentar los proyectos de convención en sí mismos si la Comisión decidiera discutirlos detalladamente.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.